

En Argentina en Pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad. Buenos Aires (Argentina): Pena Lillo / Ediciones Continente.

Estado y conflicto interburgués en Argentina. La crisis de la Convertibilidad (1999-2001).

Salvia, Sebastián Pedro.

Cita:

Salvia, Sebastián Pedro (2009). *Estado y conflicto interburgués en Argentina. La crisis de la Convertibilidad (1999-2001).* En *Argentina en Pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad.* Buenos Aires (Argentina): Pena Lillo / Ediciones Continente.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/sebastian.salvia/15>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/p5ne/agb>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

ESTADO Y CONFLICTO INTERBURGUÉS EN ARGENTINA.

LA CRISIS DE LA CONVERTIBILIDAD (1999-2001).

Sebastián P. Salvia

Introducción

Este libro trata de diversas dimensiones de la crisis de 2001 en Argentina. En este capítulo, pretendemos analizar los conflictos entre fracciones burguesas a los que da lugar la crisis de acumulación argentina, centrándonos en el impacto diferencial de la crisis en la reproducción material de dichas fracciones y en la política económica del Estado frente a ella.

Partimos de la hipótesis de que la crisis de acumulación es resultado del deterioro de la capacidad de competir de la producción capitalista local en el mercado mundial (Bonnet 2008, Astarita 2001).¹ Asumimos que la política del Estado nacional estaba determinada por su implicación en la estrategia de acumulación que había entrado en crisis. Esta política apuntaba a superar la crisis dentro de las condiciones en las que se desenvolvía la acumulación de capital, lo que afectaba su eficacia. De esta manera, vemos el conflicto interburgués como resultado del impacto diferencial de la crisis sobre las diferentes fracciones de la burguesía y de la eficacia decreciente del Estado para revertir el movimiento descendente de la producción capitalista local, en las condiciones que sancionaba la convertibilidad.

Explicitado nuestro punto de vista, es necesario criticar los aspectos más relevantes de la interpretación que se ha constituido como dominante en las ciencias sociales sobre la crisis de 2001 y la lucha interburguesa. Dicha interpretación conceptualiza la crisis como resultado de la caída de la demanda interna por la regresividad de la distribución del ingreso, a partir de un proceso de “desindustrialización” y auge de la “valorización financiera”.² La lucha

¹ Podemos conceptualizarla como una crisis de la relación de capital (Holloway 1994), en la que se degradaban las condiciones de vida de los trabajadores y se reducía el valor expropiado por los capitalistas, al mismo tiempo que se contraía la extensión de la propia relación capitalista y se diluía la eficacia de la hegemonía burguesa, por las crecientes dificultades para presentar la reproducción ampliada de dicha relación como reproducción ampliada de toda la sociedad.

² Para Basualdo, “la crisis se origina en problemas de demanda y no de oferta (...) su modificación exige revertir la regresividad distributiva vigente en la economía argentina, reconstruyendo la demanda interna y las finanzas públicas (...) Finalmente, resulta ilusorio afirmar que la superación de la crisis puede lograrse sobre la base de

interburguesa aparece como la lucha al interior de la “cúpula” de empresas capitalitas de mayor concentración y se explica por la ruptura de la “comunidad de negocios” que cimentaba, en el negocio de las privatizaciones, a los acreedores externos, las empresas multinacionales y el capital local (Basualdo 2001 y 2006).³ La lucha al interior de la cúpula empresaria se organiza en torno a dos proyectos alternativos a la convertibilidad: la devaluación y la dolarización. Ambos proyectos representan la expresión contable de los intereses de fracciones de la cúpula empresaria, es decir, la apreciación o consolidación de sus activos e ingresos.

Esta visión sobrevalora la importancia de las expresiones en favor de la dolarización y de la devaluación y las aísla de las determinaciones de la crisis, asumiendo que las diferentes fracciones del capital –en el subuniverso de la cúpula empresaria– no se veían afectadas por el movimiento deficiente de la producción (Basualdo 2001). Estos problemas son resultado de una mirada que traslada la determinación de las relaciones de clase desde la explotación en la producción material hacia la distribución del producto social, de la misma manera que reduce el conflicto al interior de la burguesía a las disputas por la distribución del producto social entre cierta cantidad de empresas de gran concentración. En las páginas que siguen, nos aproximaremos a la relación entre Estado y acumulación durante la década del noventa, centrándonos en el análisis de la relación de la política económica del Estado, el conflicto entre fracciones del capital y la caída de la convertibilidad.

Estado y capital en la convertibilidad

En este apartado, nos ocuparemos de los aspectos más relevantes de la relación entre la política estatal y la producción capitalista durante la convertibilidad y su crisis. La característica principal del período es que las condiciones generales del proceso de acumulación se basaban en el disciplinamiento social que resultaba de la *intensificación de la competencia* de la producción capitalista local con la producción capitalista global, a partir de la apertura comercial y la fijación del tipo de cambio por ley del Estado, conocida precisamente como *convertibilidad* (Astarita 2001, Bonnet 2008).

una expansión de las exportaciones, excluyendo el consumo interno, cuando las mismas representan solamente alrededor del 8% del PBI” (Basualdo 2001).

³ La ruptura consiste en la venta de las acciones del capital local a sus socios extranjeros (Basualdo 2001).

La convertibilidad eliminaba la posibilidad de compensar el déficit de competitividad en términos internacionales mediante la modificación del equivalente general de la economía argentina respecto al equivalente del mercado mundial (el dólar). Ahora bien, como la capacidad de la producción capitalista de un país de competir en el mercado mundial depende del grado de explotación de la fuerza de trabajo —es decir, de la relación de la productividad, intensidad y extensión del trabajo con el valor que reproduce a la fuerza de trabajo bajo la forma de salario—, la convertibilidad intensificaba la necesidad del capital de aumentar este grado de explotación.

Esta necesidad se materializaba en la incorporación de tecnología e insumos importados, abaratados por la apreciación del peso tras la fijación del tipo de cambio, y en la reestructuración de los procesos productivos.⁴ De la misma manera, se expresaba en el aumento de la intensidad del uso y la precariedad de la contratación de la fuerza de trabajo, facilitadas por las leyes de “flexibilización laboral” del Estado y por el crecimiento del ejército de reserva, propio de la intensificación de la competencia con la producción capitalista global.⁵ Estas transformaciones en el proceso de producción fueron mecanismos privilegiados de la acumulación capitalista, en la carrera de la competitividad en términos internacionales (Salvia y Frydman 2004).

Sobre estas bases, la convertibilidad resultó efectiva para el aumento de la explotación mediante el aumento de la productividad e intensidad del trabajo.⁶ Entre 1990 y 1998, el producto por trabajador (sobre el que influyen tanto los cambios en la productividad como en la intensidad) aumentó un 71,5%⁷. La magnitud de este aumento fue tal que se redujo la brecha internacional de productividad, tomando como indicador la reducción de la brecha de productividad industrial respecto a los Estados Unidos, que concentraba la cuarta parte de la producción mundial. Al mismo tiempo, al contrario de la prédica de la burguesía industrial en relación a los aumentos salariales por productividad, el salario se mantuvo relativamente estancado desde 1993.⁸

⁴ Entre 1990 y 1999, la inversión privada neta de adquisiciones de empresas ascendió a 106.000 millones de dólares, importándose bienes de capital y piezas para éstos por 82.000 millones de dólares (datos del Ministerio de Economía y de Astarita 2001, en base a Secretaría de Industria).

⁵ Entre 1993 y 1997, el trabajo en negro en empresas privadas creció 10,7%, mientras que el trabajo registrado creció 3,9%. Estas tendencias operaban con más fuerza en la industria: el trabajo en negro creció 4%, mientras que el trabajo registrado cayó un 8,3% (datos de INDEC).

⁶ La necesidad de aumento constante de la productividad del trabajo es una de las dimensiones de la lucha en torno a la explotación de la clase trabajadora, que constituye la primera determinación de la burguesía como clase.

⁷ Astarita (2001), en base a datos de la Secretaría de Industria.

⁸ De esta manera, entre 1993 y 1997 se produjo un aumento del trabajo expropiado del orden del 58,2%, medido por cada trabajador asalariado privado. Si tomamos el excedente de la producción y el salario real, podemos

Este éxito en el *crecimiento* de la *explotación* del trabajo creaba las bases materiales para la distribución del trabajo excedente entre las distintas fracciones burguesas, cimentando la *conformación de un sólido bloque en el poder* que incluía a todas las fracciones de la burguesía, y que resultó de suma importancia para la eficacia de las políticas neoliberales del Estado (Piva 2007).

Sin embargo, el sostenimiento de la convertibilidad dependía de la inserción del proceso de acumulación argentino en el proceso de acumulación global, es decir, de la relación con el mercado mundial. Las condiciones que la convertibilidad sancionaba para la competencia internacional determinaban un continuo déficit comercial⁹, dada la ascendente pero menor productividad relativa de la economía argentina y la apreciación del tipo de cambio real.¹⁰

El Estado nacional estaba implicado en la reproducción de las condiciones de la acumulación con un superávit continuo en la cuenta financiera, es decir, en el balance de la entrada y salida de divisas a la economía local.¹¹ El flujo positivo de divisas contribuía a sostener la estrategia de acumulación¹², por dos vías: la inversión extranjera directa, que parecía evitar el riesgo de desvalorización por la fijación del tipo de cambio, y el endeudamiento externo por encima del pago de intereses, que permitía al Estado cubrir el déficit comercial y acumular reservas de divisas.¹³

lograr un indicador preliminar de la tasa de explotación, que creció del 103% en 1993 al 176% en 1997 (elaboración propia en base a datos INDEC).

⁹ Entre 1992 y 2000, la balanza comercial es deficitaria todos los años, con un déficit promedio de bienes y servicios por 4.500 millones de dólares al año. (Datos del Balance de Pagos del Ministerio de Economía.)

¹⁰ La fijación del tipo de cambio determinaba una apreciación de éste, que llegaba al 28% para diciembre de 1993 en relación a enero de 1991, según el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del BCRA. Aronskid 2001, Gerchunoff y Torre 1996, J. Iñigo Carrera 2002 conceptualizan esta evolución del tipo de cambio real en la década del noventa como sobrevaluación del peso, lo que nos parece correcto si se tiene en cuenta que la sobrevaluación o subvaluación de la moneda se da en relación con el grado de explotación de la fuerza de trabajo, y no solamente en relación a una paridad de precios internacionales.

¹¹ De esta manera, la cuenta financiera era fuertemente positiva cada año, con un promedio de 12.800 millones de dólares al año, de los cuales casi 6.800 millones son recibidos por el Estado nacional. (Datos del Balance de Pagos del Ministerio de Economía.)

¹² Conceptualizamos una “estrategia de acumulación”, siguiendo a Bonnet (2008: 277): “La noción de *estrategias de acumulación* —relacionada con la de *proyectos hegemónicos*— introducida por Jessop es en este sentido un punto de partida adecuado (...) Detrás de la dirección de una fracción hegemónica, una estrategia de acumulación operaría como una suerte de marco para una acumulación capitalista que integra al conjunto de las fracciones en pugna: ‘un marco estable —en palabras de Jessop— en el cual la competencia y los intereses en conflicto pueden ser conducidos sin romper la unidad de conjunto del circuito del capital’ (...) Las políticas de reestructuración capitalista enmarcadas por la convertibilidad pueden entenderse como políticas que apuntaban a la consolidación de una determinada estrategia de acumulación (...) Dirigida por las fracciones de la gran burguesía más aperturistas, dicha estrategia de acumulación orientada hacia el mercado mundial operó durante la década del noventa, efectivamente, como un marco para la acumulación capitalista conjunta de las distintas fracciones de la burguesía”.

¹³ De esta manera, en pleno auge neoliberal, el Estado ejercía cierta regulación del movimiento de la producción, como puede verse en la fijación de las condiciones del intercambio en relación al mercado mundial, en la modificación de las condiciones de compra y uso de la fuerza de trabajo, en el aprovisionamiento de recursos para ampliar la escala del proceso de producción y en la distribución de renta diferencial de la tierra hacia el

Más aún, la *capacidad de competir de la producción capitalista local en el mercado mundial se deterioraba en la segunda mitad de la década*, dado el aumento de la brecha de productividad de la economía argentina en términos internacionales (Piva: 2007). Como indicador de esto podemos ver que la brecha de productividad industrial respecto a los Estados Unidos creció un 13,2% entre 1997 y 2001.¹⁴ Este deterioro se veía agravado por la apreciación del peso como consecuencia de las devaluaciones de países importantes en términos comerciales, como Brasil¹⁵, y por la caída de los precios internacionales de los productos agrarios destinados al mercado mundial, que se inicia en 1997 y llega a su punto más bajo en 2001.¹⁶

El resultado de estas tendencias fue un movimiento de reproducción deficiente del proceso social de producción desde fines del año 1998, cuya magnitud puede verse en la caída del producto bruto, de un 8,4% entre 1998 y 2001, y en la caída de la intensidad de la explotación: entre 1997 y 2001 se revirtió la tendencia al incremento del valor expropiado a los trabajadores, llegando a una reducción de 17,8%.¹⁷ Como resultado, se produjo la caída de la inversión capitalista, lo que alejaba la posibilidad de la recuperación del proceso de producción.¹⁸

Sobre la base de este movimiento deficiente de la producción capitalista se produjeron dos procesos de gran importancia: comenzó a *resquebrajarse la solidez del bloque en el poder*, poniéndose de relieve una tensión entre la expresión de sus intereses generales de clase en la reducción del precio y la intensificación del uso de la fuerza de trabajo, y la expresión de los intereses corporativos de las distintas fracciones burguesas en la competencia por la apropiación de un excedente disminuido; y se incrementó la *presión a la depreciación de la fuerza de trabajo* como medio de recuperación de la tasa de ganancia, al mismo tiempo que se redujo la fuerza de trabajo puesta en movimiento, en particular en aquellas actividades más

capital industrial en general mediante apreciación del peso, en la convalidación de la dirección de la acumulación ante los conflictos laborales, y en la organización de la hegemonía que permitía el desarrollo de este proceso en un marco de consenso social. La separación de lo económico y lo político propia del capitalismo, que es real en tanto que el Estado no actúa directamente como propietario de los medios de producción (más real que nunca dado el repliegue del Estado de los espacios de producción de los que era propietario mediante el proceso de privatizaciones), muestra al mismo tiempo su carácter ilusorio en esta regulación estatal de la acumulación de capital.

¹⁴ Datos de Iñigo Carrera (2007), en base a INDEC y *Bureau of Labour Statistics*.

¹⁵ Sobre los efectos de la devaluación brasileña en el proceso de acumulación de capital en Argentina, véase el artículo de Julián Kan incluido en este libro.

¹⁶ En el período 1997-2001, el peso se apreció en un 16%, y los precios de los tres principales cultivos, la soja, el maíz y el trigo, cayeron respectivamente un 46,3, 46,8 y 33,9% (datos de Lattuada 2006).

¹⁷ Utilizamos la tasa del excedente en relación a la cantidad de trabajadores que lo producen (elaboración propia en base a datos del INDEC).

¹⁸ La inversión cayó un 13,2% para el período 1999-2001 respecto al período 1996-1998, según datos del Ministerio de Economía. Esto fue la consecuencia lógica de la reducción de la ganancia, dado el carácter específico de la producción capitalista en la producción de plusvalor y su realización en la venta de la mercancía.

afectadas por la competencia externa.¹⁹ La competencia por una mayor apropiación del excedente disminuido era la forma que tomaba el conflicto de fracciones burguesas, que intentaban moderar para sí los efectos del movimiento descendente de la competitividad de la producción capitalista local en el mercado mundial, iniciado en la segunda mitad de los noventa. La depreciación y reducción de la fuerza de trabajo puesta en movimiento, cuyos efectos pueden verse en diversos indicadores estadísticos,²⁰ era la forma en que la burguesía como clase entraba en conflicto con la clase trabajadora. A continuación, trataremos las dimensiones del conflicto al interior de la burguesía y de ésta con la clase trabajadora, en relación a la marcha de la crisis y a la política del Estado frente a ésta.

Fracciones burguesas y política estatal en la crisis de acumulación:

Precisemos lo dicho sobre la crisis de acumulación y la reproducción de la clase burguesa: el movimiento descendente de la acumulación afectaba la reproducción de la burguesía como clase, contrayendo la escala de la producción y la extensión de la relación capitalista, disminuyendo el trabajo excedente y la inversión; pero esto sucedía de manera diferencial para las distintas fracciones burguesas. Un indicador muy general de este carácter diferencial puede encontrarse en el nivel de actividad sectorial: entre el tercer trimestre de 1998 e igual período de 1999, la producción industrial y la actividad de la construcción cayeron un 8,7% y un 10,4% respectivamente, aunque el producto del sector de servicios cayó en menor medida, un 2,2%, y la intermediación financiera creció levemente (datos de INDEC y *Clarín* 17/12/99). De esta manera, podemos ver que la *crisis de acumulación impactaba en mayor medida en la burguesía industrial, que en el capital asentado en los servicios y la circulación*. Por ello, las tendencias deflacionarias mencionadas operaban con mayor intensidad en la

¹⁹ ¹⁹ En términos generales, la depreciación salarial avanzó allí donde era más posible: el salario de los trabajadores no registrados cayó un 6,5% entre 1997 y 2001 (datos del INDEC). En términos sectoriales, en la producción industrial, en 2001 el salario real de los trabajadores registrados era un 9,7% menor que en el año 1994 (datos de Basualdo 2003). Por otra parte, entre 1999 y 2001 fueron eliminados aproximadamente 245.000 puestos de trabajo, un 2,3% del total de la población asalariada ocupada. La reducción de los puestos de trabajo en el período 1998-2001 es mayor en los trabajadores registrados (con mayores salarios y donde la reducción nominal del salario es más compleja de instrumentar) que en los trabajadores no registrados (pese a la menor estabilidad y a los menores costos de despido de éstos).

²⁰ Entre octubre de 1998 y octubre de 2001, la indigencia pasó del 6,9% al 12,2%, la pobreza del 25,9% al 35,4% de la población total, y la población desocupada creció en un 47,6% (datos del INDEC), como resultado de la expulsión de fuerza de trabajo del proceso de producción y de la reducción del valor que reproduce a la clase trabajadora.

producción industrial y en la construcción, llegando a reducciones del salario de los trabajadores en negro del 7,7 y el 16,4%, respectivamente, entre 1997 y 2001.²¹

Las fracciones capitalistas asentadas en la esfera de la producción en sentido estricto intentaban recuperar las condiciones de acumulación por vía de la deflación salarial, es decir, en contradicción con los trabajadores. Pero esto no alcanzaba para recuperar la capacidad de competir internacionalmente y la tasa de ganancia. Por ello, intentaban influir políticamente en la competencia intercapitalista por la distribución del trabajo excedente, es decir, intentaban reconstituir sus condiciones de acumulación, en conflicto con los capitales de la esfera de la circulación, y los servicios a la producción. En la base de este intento se encontraba la disminución del excedente que mencionamos anteriormente.²²

Los primeros signos de conflicto entre fracciones capitalistas se hicieron visibles en la segunda mitad de 1999. Posteriormente a la elección presidencial, tiene su primera aparición pública una alianza de fracciones burguesas asentadas en la producción, que resultaban especialmente afectadas por la crisis iniciada en 1998. Asumió la denominación de “Grupo Productivo” y estaba conformado por organizaciones representativas del capital industrial y agrario, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).²³ El Grupo Productivo afirmaba la necesidad de cambiar la orientación general de la política económica (*Clarín* 31/10/99), que sostenía las condiciones de reproducción del capital asentado en los servicios públicos y financieros. Pretendía *compensar las deficiencias de competitividad mediante la canalización de un flujo de recursos hacia la esfera de la producción*, bajo la forma de subsidios estatales. Como vimos anteriormente, estas deficiencias eran resultado de la ampliación de la brecha de productividad internacional experimentada en la segunda mitad de la década del noventa y se agravaban por la apreciación del tipo de cambio real. Cabe destacar que estas corporaciones empresarias *no presionaban por la devaluación nominal de la moneda*, sino por medidas que, por vía de la reducción de costos para la producción, signifiquen una mejora de la

²¹ Elaboración propia en base a datos del INDEC.

²² En este período, predominan los intereses particulares de fracciones del capital en sus intentos por influir en la dirección del proceso de acumulación de capital, como expresión de la competencia por la distribución de un trabajo excedente disminuido. En términos generales, esta disputa aparece como la lucha entre el capital asentado en los servicios públicos y financieros y el capital asentado en la esfera de la producción.

²³ Con la profundización de la crisis en el año 2001, el Grupo Productivo se propondría alinear tras de sí a organizaciones de la clase trabajadora, incorporando algunas demandas de organizaciones como la CGT. Como ejemplo, en una reunión entre la UIA y la CGT, en agosto, ambas organizaciones reclamaban planes de apoyo a la producción y un subsidio para jefes de hogar desocupados (*Clarín* 28/08/01). De esta manera, la alianza de fracciones burguesas que constituía el Grupo Productivo intentaba ampliar su base de apoyo y presentar sus intereses particulares (expresados en sus demandas al Gobierno de subsidio a la producción) como expresión de los intereses de un amplio conjunto social, expresando la necesidad de construcción de hegemonía para actuar en la disputa interburguesa (Salvia 2007).

competitividad internacional para la producción capitalista local, una devaluación real para el capital asentado en la producción en sentido estricto.²⁴

Contrariamente, los capitales asentados en la circulación y los servicios públicos presionaban por el recorte de los gastos del Estado y la reducción de la planta de trabajadores estatales (*Clarín* 05/11/99), para cerrar el déficit fiscal y orientar los recursos del Estado para garantizar el crédito internacional a éste y a las empresas privadas. Se trataba de lograr la continuidad del flujo positivo de divisas hacia la economía argentina, condición para el sostenimiento de la convertibilidad, que sancionaba las condiciones de su propia reproducción ampliada.

La estrategia del nuevo gobierno nacional de la Alianza era canalizar la crisis capitalista dentro de los márgenes de las condiciones de acumulación establecidas en la década del noventa. La táctica era la reducción del déficit fiscal hasta llegar al nivel comprometido con el FMI (Peralta Ramos 2007), lo que debía generar la baja de la tasa de interés y junto con ello una mayor demanda por el crecimiento de la inversión extranjera directa. De esta manera, se lograría la reconstitución de la acumulación, lo que permitiría una política favorable a los capitales asentados en la producción.²⁵ Así, las primeras medidas de gobierno tuvieron como objetivo realizar un *ajuste* del gasto del Estado de \$1.400 millones y un aumento de los recursos mediante un aumento y extensión de impuestos a las ganancias y al consumo de determinados productos con los que el gobierno esperaba recaudar \$2.900 millones.²⁶ Se trataba, entonces, de una política de reactivación por etapas, cuyo primer momento consistía en la aplicación de medidas recesivas, que debía lograr la reactivación por medio de la reducción del déficit fiscal y la baja de la tasa de interés. Como resultado, el proceso recesivo

²⁴ El diagnóstico del Grupo Productivo se expresa con claridad en la VII Conferencia Industrial de 2001, en la que señalaba como determinantes de la crisis de acumulación el aumento de los precios de los servicios públicos por encima de los precios de los productos industriales y los precios minoristas (lo que implicaba un mayor peso de los servicios públicos en los costos de producción), la apreciación del peso respecto a las monedas de los principales socios comerciales argentinos y el nivel de la tasa de interés. Según la UIA, los precios de los servicios públicos aumentaron un 103% entre 1991 y 2000, mientras que los precios industriales aumentaron un 14%, lo que significaba un aumento en el componente insumos en el precio de las mercancías industriales, afectando las ganancias en la producción industrial y las posibilidades de ampliación de la inversión. Asimismo, el peso se había revaluado un 10% frente al dólar y un 27% frente a una canasta de monedas en proporción a los destinos de las exportaciones. Por otra parte, las PyMEs tenían costos de financiamiento superiores en un 300% respecto a las empresas de mayor concentración (según “La visión de la Unión Industrial Argentina sobre la depresión económica. Propuestas para superarla”, en *Memorias de la VIIª Conferencia Industrial Argentina. Encuentro de los Argentinos: un Proyecto Nacional para el desarrollo. El verdadero riesgo es no tener país*, organizada por la UIA del 20 al 22 de noviembre de 2001).

²⁵ Reconstruida la acumulación, se moderarían los conflictos al interior de la burguesía, canalizándose de modo que no alterasen la unidad del proceso de reproducción del capital. Se pretendía así recomponer la unidad de la burguesía como resultado de la baja de la tasa de interés y la mayor demanda que generaría el aumento de la inversión extranjera directa.

²⁶ El ajuste del gasto recayó fundamentalmente sobre el funcionamiento del PAMI, las jubilaciones mayores a \$3.100, los subsidios para desocupados y los regímenes de promoción industrial, y el aumento de impuestos afectaba especialmente a los asalariados y trabajadores autónomos.

iniciado en 1998 no podía revertirse, y el Estado perdía capacidad para lograr la reducción del déficit fiscal, la baja la tasa de interés, y el aumento de la inversión.

En consecuencia, la crisis de acumulación continuaba impactando fuertemente en las fracciones burguesas asentadas en la producción en sentido estricto y se reproducían las condiciones del conflicto interburgués. En la primer mitad de 2000, la actividad de la construcción se reduce en un 10,2% respecto al mismo período del año 1999, afectando fuertemente a la producción de insumos para la construcción. Entre el tercer trimestre de 1999 y de 2000, la producción industrial caía un 3,4%, la caída de la construcción alcanzaba el 8,9% y la agricultura se reducía en un 2,4%; en el mismo período, los servicios y la intermediación financiera se mantenían prácticamente estancados. Las diferencias en el nivel de actividad en los diferentes momentos del proceso global de producción se reflejan en la extensión de la relación capitalista: entre 1999 y 2000, el proceso de producción capitalista expulsó casi 170.000 trabajadores en la construcción, la industria y la producción agraria, mientras se incrementaba levemente el número de trabajadores en la intermediación financiera (datos de INDEC).

La pérdida de eficacia de la política económica del gobierno nacional acentuaba las tensiones al interior de la clase burguesa. El Grupo Productivo, que expresaba los intereses de capitales asentados en la producción industrial y agraria, continuaba demandando al Estado que orientara recursos hacia la producción, de manera de compensar el déficit de competitividad en términos internacionales.²⁷ Pero además pretendía absorber recursos de los servicios y la circulación, bajo la forma de aumentos de impuestos o creación de nuevos tributos sobre estas actividades económicas. En este sentido, demandaban al gobierno la restitución de los aportes patronales (que habían sido rebajados en 1994) para los servicios públicos, los bancos y los supermercados, y la creación de impuestos específicos sobre las ganancias de las empresas privatizadas, como expresaban en su “Declaración de Tigre”. Por otro lado, la Asociación de Bancos de la Argentina, que expresaba los intereses de capitales asentados en la intermediación financiera, rechazaba las propuestas del Grupo Productivo e insistía en el mantenimiento de las políticas de reducción del gasto estatal llevada adelante por el gobierno nacional (*Clarín* 24/6 y 2/7/00).

²⁷ Estos capitales defendían igualmente la necesidad de asegurar el flujo de divisas para el sostenimiento de la convertibilidad, como puede verse en el apoyo brindado a la operación del Blindaje financiero. La primera manifestación de un importante capitalista industrial sobre la necesidad de liberar el tipo de cambio, realizada en agosto de 1999 por Roberto Rocca, del grupo Techint (Peralta Ramos 2007, Bonnet 2008), es al mismo tiempo la única hasta entrado el año 2001. Por otra parte, el mismo Rocca apoyó al Gobierno en los momentos en que el endeudamiento externo, condición para sostener el tipo de cambio, amenazaba con cortarse. Véase, por ejemplo, *Clarín* 09/11/2000.

Ambos sectores del capital intentaban presentar sus intereses como intereses de la clase en su conjunto: los capitales asentados en la producción afirmaban que sobre la base de sus propuestas crecería la actividad económica, lo que generaría un mayor consumo de servicios públicos, menor morosidad con los bancos, mayor consumo en cadenas comerciales y, finalmente, mayor recaudación de impuestos; al mismo tiempo, los capitales asentados en la circulación afirmaban que la reducción del gasto estatal permitiría reducir la tasa de interés y alentar la inversión, logrando el aumento de la productividad del trabajo y la reactivación económica, y finalmente la mejora de la competitividad en términos internacionales y la ampliación de la producción para el mercado externo.

Tipo de cambio y flujo de divisas como condiciones y límites del conflicto interburgués:

El escenario del conflicto entre fracciones de la burguesía estaba configurado por la inserción de la economía argentina en el mercado mundial: como hemos señalado, el incremento de la brecha internacional de productividad junto a la apreciación del peso respecto a las restantes monedas del mundo, por la apreciación del dólar al que estaba atado²⁸, deterioraban la competitividad internacional de la economía argentina. Este cuadro se veía agravado por la reversión de los flujos de capital hacia los países desarrollados (Bonnet 2008), con las dificultades para el acceso al crédito externo y la caída de la inversión extranjera directa. Estas eran las condiciones en las que se daba el conflicto, y eran a la vez un límite a su desarrollo: la necesidad de continuidad del flujo positivo de divisas y de sostenimiento de la paridad cambiaria.

La delicada situación del frente externo y la recesión interna constituían una amenaza para el poder de compra del peso como equivalente general de la producción local en relación al mercado mundial. La política económica del gobierno tomaba como objetivo preservar este poder de compra y el flujo positivo de divisas que lo sostenía. Ahora bien, sucedía este objetivo encontraba una dificultad decisiva dada la situación del frente externo: *la economía argentina requería una permanente ampliación del crédito externo* para cubrir los déficit fiscal y comercial, que en una alta proporción era tomado por el Estado.

Pero además, el deterioro de la competitividad internacional y el estancamiento de la economía dificultaban la reducción de ambos déficit. Esto comprometía la continuidad del

²⁸ En particular respecto a la moneda del Brasil, devaluada en 1999

ingreso de divisas, llevando a un aumento de las tasas de interés, que al mismo tiempo alejaba la posibilidad de recuperar el nivel de inversión y contribuía a deprimir la economía, agravando el problema del déficit. De esta manera, crecían las dificultades del Estado nacional, como principal tomador de crédito externo, para obtener los recursos que los déficit requerían. La creciente dependencia del endeudamiento externo del Estado, en las condiciones de crisis de acumulación descritas, abría la posibilidad de *default*. En consecuencia, la tasa de interés que el Estado debía pagar para obtener crédito crecía, empujada por el riesgo de *default*, conocido como “riesgo país”.

Esta situación llegaba a su punto máximo el 8 de noviembre de 2000, cuando el Estado tuvo que aceptar tasas de interés de 16% anual para bonos de un año de plazo, duplicando la tasa aceptada un mes antes.²⁹ Las tasas de interés convalidadas por el Estado nacional no podían sostenerse en el tiempo, lo que evidenciaba la posibilidad de la cesación de pagos. Esta situación hizo necesario un aporte extraordinario de créditos de los organismos financieros internacionales para alejar el riesgo de *default*, que cobró forma en el llamado “Blindaje financiero”, que comenzó a negociarse tras esa colocación de títulos del 8 de noviembre y fue aprobado por el FMI a mediados de diciembre de 2000. El objetivo del Blindaje era garantizar el pago de la deuda externa del Estado hasta el fin de 2001 y permitir la continuidad de la colocación de títulos estatales en el mercado financiero.³⁰

Entre la colocación de títulos y el Blindaje, el Gobierno recibió apoyo del Consejo Empresario Argentino (que agrupaba a las 30 empresas más importantes del país), del Grupo Productivo y de la Asociación de Bancos de la Argentina (cuyos miembros además refinanciaban los vencimientos de deuda del estado). Estos últimos presionaban por un ajuste en las provincias (*Clarín* 9/11, 10/11 y 18/11/00). De todas maneras, antes de la aprobación del Blindaje, la UIA afirmaba que sólo con medidas de reactivación y aliento a la inversión podía superarse la crisis (*Clarín* 15/12, 21/12 y 29/12/00). El Blindaje lograba una mayor unidad interna de la burguesía, ya que mantenía el flujo positivo de divisas que permitía alejar

²⁹ La manifestación de la incapacidad política del Gobierno nacional para conducir un proceso de deflación salarial y aumento de la intensidad laboral fue una de las determinaciones de esta escalada de la tasa de interés. El Gobierno nacional había asumido la política de reducción salarial del personal del Estado, con el ajuste de mayo de 2000, y presionaba a los gobernadores para que siguieran el mismo camino en sus provincias, lo que creaba importantes conflictos entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Al asumir como política del Estado el fortalecimiento de los mecanismos de producción de plusvalor absoluto desplegados en la producción, con una nueva ley de flexibilización laboral, se generó una crisis política al interior de la Alianza, con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, lo que evidenciaba la debilidad política del Gobierno para hacer realidad las necesidades capitalistas frente a los problemas de una economía estancada. El lugar de la corrupción denunciada por el vicepresidente en la aprobación de dicha ley en la pérdida de consenso social excede el marco de este análisis.

³⁰ Consistía en una serie de créditos otorgados por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de España con una tasa promedio de 8%, junto a renovaciones de deudas de bancos y AFJP locales (*Clarín* 8/11, 11/11, 17/12 y 19/12/00).

momentáneamente la posibilidad de la cesación de pagos y sostener la convertibilidad y, al mismo tiempo, hacía previsible la baja de la tasa de interés y con ello la reducción de uno de los costos de la producción. Esto último era precisamente lo que la UIA reclamaba a los bancos locales: la reducción de la tasa de interés interna (*Clarín* 21/11/00).

Esta mayor unidad de la burguesía tenía como base la necesidad de todas sus fracciones de evitar la cesación de pagos. La forma de lograrlo, el salvataje de los organismos multilaterales de crédito, era la confesión de que la Argentina no podía generar los recursos para reducir la necesidad de financiamiento destinado al pago de deuda. Durante toda la década, el Estado nacional tomó créditos externos por un valor mayor a los pagos por deuda que tenía comprometidos al exterior. Es decir, el Estado cubría los pagos de la deuda con nuevos créditos, capitalizando los intereses de la deuda. De esta manera, los pagos comprometidos eran crecientes, al igual que la necesidad de financiamiento para cubrirlos³¹. Pero además, los déficit comercial y fiscal implicaban al mismo tiempo la necesidad de ampliación del crédito y la imposibilidad de obtener las divisas para afrontar esos pagos de otra fuente que no fuera el mismo endeudamiento externo. La ineficacia de la política estatal para reducir ambos déficit y recuperar el crecimiento de la economía evidenciaba que Argentina no podía revertir este proceso de dependencia de la ampliación del crédito externo para afrontar las obligaciones del propio crédito externo, y la crisis interna de la Alianza amplificaba esta evidencia.

El Blindaje era, al mismo tiempo que la confesión del fracaso de la inserción argentina en el mercado mundial, la última oportunidad de revertir este fracaso bajo las condiciones de la convertibilidad, cubriendo la ampliación de crédito necesaria y bajando la tasa de interés. La baja de la tasa de interés debía favorecer la inversión, lo que tenía que empujar hacia arriba la actividad económica. Pero esto dependía de la capacidad de lograr un aumento de la competitividad de la economía argentina, sobre la base de dos dimensiones: la reducción de la brecha internacional de productividad y la baja del costo laboral.³² Éste era el objetivo del Blindaje para sus financistas: el titular de FMI afirmaba que el Gobierno debía “promover un crecimiento acelerado de la productividad y otras mejoras en la competitividad” y en el mismo sentido se pronunciaron el BM y el BID (*Clarín* 19/12/00). Pero este horizonte requería tiempo, que no era precisamente algo que tuviera el Estado nacional: el Blindaje

³¹ La contracción del proceso de acumulación incrementaba el peso de esta necesidad de financiamiento en relación a la capacidad de producción de la economía local.

³² En condiciones de reactivación, puede lograrse el aumento de la productividad por un mayor uso de la capacidad instalada, la reorganización del proceso de trabajo y la inversión en nueva tecnología. En condiciones recesivas, este camino es mucho más dificultoso y resulta más posible para los capitalistas el camino de la reducción nominal del salario (Bonnet 2008).

permitía un respiro para el Gobierno, pero los acreedores esperaban los resultados fiscales y los indicadores de crecimiento económico que se registraran en el primer trimestre de 2001, por lo que el éxito del Blindaje radicaba en la capacidad de evidenciar una recuperación del crecimiento económico y de la recaudación fiscal en dicho período (*Clarín* 19/12/00).

Pero, aún cuando pueda producirse más, las mercancías tienen que realizarse en el intercambio para que se sea posible la ampliación de la producción. En condiciones recesivas, el aumento de la demanda tenía que venir de la exportación. Ahora bien, la fijación del tipo de cambio implicaba que la economía argentina absorbía los efectos de la apreciación del dólar, y la devaluación brasileña apreciaba particularmente el peso respecto al principal socio comercial argentino. Y, además, las perspectivas para la inversión desmejoraban con el inicio de la recesión en EE.UU. y los recortes de ganancias, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del valor de las acciones (*Clarín* 15/11, 30/11, 16/12 y 19/12/00). Sin ampliación de la demanda vía exportaciones y con un mercado interno deprimido, con reflujo de capitales hacia los países centrales para cubrir las pérdidas provocada por la crisis financiera de EE.UU., no es posible la recuperación de la inversión, menos aún en el corto plazo.³³ *Sin mayores posibilidades de realización de la mercancía, no hay mayor inversión*, aún con una baja de la tasa de interés.

La evolución de la economía argentina y las cuentas fiscales después del Blindaje está marcada por la continuidad del deterioro de la inserción argentina en el mercado mundial y el estancamiento de la producción. La actividad industrial caía un 3,5% en enero-febrero de 2001, en relación enero-febrero de 2000 (datos del INDEC). En febrero caía la recaudación impositiva dependiente del nivel de actividad: el IVA y el impuesto a los combustibles caían 2,2 y 9,3%, respectivamente (*Clarín* 02/03/00). La caída de la recaudación se debía tanto a la recesión como a la deflación que generaba (que llegaba al 1,7% anual), reforzada por la política de ajuste estatal (*Clarín* 06/03/01). El déficit fiscal de enero y febrero sumaba \$1.500 millones, una cifra equivalente al total comprometido con el FMI para todo el trimestre, poniendo en peligro incluso los futuros desembolsos del Blindaje.³⁴ Con la manifestación de la caída de la producción y de la recaudación fiscal, se hacía evidente que el gobierno no podía mantener el déficit en los niveles acordados con el FMI, lo que auguraba la necesidad de una futura ampliación del crédito. En consecuencia, subía el riesgo país, bajaban los bonos

³³ El reflujo de capitales hacia los países centrales tras la crisis de Turquía y la crisis bursátil en EE.UU., generó condiciones de oportunidad negativas para el otorgamiento de crédito a la Argentina.

³⁴ En enero de 2001, el déficit fiscal fue un 67% mayor al de enero de 2000, lo que significaba la mitad del déficit comprometido ante el FMI para el trimestre (*Clarín* 2 y 3/3/00).

del Estado y caían las acciones en la bolsa. A ello se sumaban las crecientes dificultades internas de la Alianza, ante la continuidad del estancamiento económico.

En esta situación, se produjo la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea. Si el Blindaje ponía de manifiesto el fracaso de la inserción argentina en el mercado mundial, la renuncia de Machinea ponía de manifiesto la incapacidad de revertir el proceso de crisis en las condiciones que establecía la convertibilidad. Es decir, la incapacidad de sostener la estrategia de acumulación y las relaciones de fuerza correspondientes, que habían entrado en crisis, por vía de la reducción de los gastos del Estado y la capitalización de intereses de la deuda. No existían condiciones para transformar la baja de la tasa de interés en inversión, de manera de superar el proceso recesivo. La continuidad de éste fue el síntoma del fracaso del gobierno (*Clarín* 3/3 y 4/4/01). La renuncia de Machinea fue, asimismo, la señal de las dificultades para sostener la paridad cambiaria, de manera que a partir de ese momento se iniciaría el movimiento descendente de las reservas de divisas del Banco Central.³⁵

Política deflacionaria, resistencia de los trabajadores, y conflicto interburgués:

Tras el fracaso de la transformación de la baja de la tasa de interés por vía del crédito externo en inversión, la alternativa del gobierno era asumir una política de aliento a la inversión vía subsidios o atacar los problemas fiscales que presionaban al alza de la tasa de interés, de manera de cumplir con el déficit acordado con el FMI y evitar la necesidad de ampliación permanente del crédito (*Clarín* 3/3/01). Finalmente, asumió la *profundización, en una escala mucho mayor, de la política deflacionaria* que había fracasado hasta ese momento. Con Ricardo López Murphy como ministro de Economía, el Gobierno nacional decretó un nuevo recorte de gastos estatales del orden de \$1.962 millones para el 2001 (previendo llegar en 2002 a una reducción de \$2.485 millones), fundamentalmente a partir del presupuesto de educación, y el incremento del IVA en servicios de esparcimiento.³⁶

Tras la mayor unidad de la burguesía alcanzada con la firma del Blindaje, la imposibilidad de reactivar la economía y la profundización de la política recesiva provocaron una escalada del

³⁵ Al día de su renuncia, las reservas se encontraban en un nivel similar al inicial del año 2001 (según datos del BCRA).

³⁶ La mayor parte de los recortes se aplicaban sobre los salarios de los docentes de la educación primaria, los fondos de la educación universitaria y terciaria, subsidios provinciales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones. Las medidas se completaban con el envío al Congreso de leyes para vender las empresas del Banco Nación, concesionar la Lotería Nacional y la casa de la Moneda, dar de baja a 40.000 trabajadores estatales y aumentar la flexibilización laboral (*Clarín* 17/3/2001).

conflicto al interior de la burguesía. La Asociación de Bancos de la Argentina y el Consejo Empresario Argentino apoyaron el ajuste implementado por López Murphy, en una reunión de 500 empresarios que ovacionaron al ministro. Pero la Unión Industrial Argentina no concurrió (*Clarín* 17 y 18/3/01) y el Grupo Productivo criticó el programa del ministro por carecer de políticas de reactivación e incentivos a la producción, y señaló su continuidad con los ajustes de Machinea, que habían fracasado en lograr la recuperación económica (*Clarín* 7/3 y 17/3/01). La oposición burguesa al programa de ajuste tenía su razón de ser en el hecho que, aun en el caso de que tuviera éxito en su implementación, el programa de López Murphy atacaba una manifestación de la crisis (el déficit fiscal) y no sus determinaciones (la pérdida de competitividad por el deterioro de la productividad relativa y por la apreciación de la moneda frente a las monedas del mundo, excluyendo el dólar). Por lo tanto, no podía superar las limitaciones del aumento de la inversión que se encontraban presentes cuando la firma del Blindaje.

De todas maneras, la suerte del ajuste estaba echada por la incapacidad política de llevarlo adelante. La inviabilidad del ajuste forzó la renuncia del ministro López Murphy a los pocos días de haber asumido el cargo. Las formas en que se manifestó esta inviabilidad expresan las dificultades que enfrentó el gobierno para presentar el ajuste como *interés general* de la nación. A la oposición del Grupo Productivo se sumaba la resistencia activa de los trabajadores expropiados de su salario y los apoyos que éstos lograban, así como también el rechazo de buena parte del oficialismo y de la oposición. El ajuste era rechazado por los gobernadores del Partido Justicialista, pero también por la propia alianza de partidos de gobierno, que se iba desintegrando con el avance de la crisis³⁷. En oposición al ajuste, los trabajadores de los gremios de educación lanzaron un paro de 48 horas, la CGT de Moyano y la CTA convocaron a un paro para el día 21 de marzo, con adhesión de la CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias), y los estudiantes universitarios tomaron las facultades y cortaban las calles (Iñigo Carrera y Cotarelo 2004, Piva 2008). Se produjeron más de cien tomas de facultades y gran cantidad de protestas de trabajadores desocupados (*Clarín* 20/3/01).

La breve gestión de López Murphy finalizó el 19 de marzo, como salida de una situación política que catalizó el conflicto social, especialmente las luchas de los estudiantes, los trabajadores estatales y los desocupados, y terminó unificando al radicalismo, el Frepaso y los

³⁷ La crisis interna de la Alianza generaba un abandono de los cargos en el Gobierno nacional y en la oposición de los líderes de sus dos partidos componentes: se produjeron las renuncias de dos ministros de la UCR, la retirada del ministro y la mayoría de los secretarios de Estado del Frepaso y el rechazo del plan por el ex vicepresidente “Chacho” Álvarez y por el presidente de la UCR Raúl Alfonsín (*Clarín* 17 y 18/3/01).

gobernadores del PJ contra su permanencia como ministro de Economía. Esta situación evidenciaba un nuevo fracaso de la política de relanzamiento de la acumulación por la vía deflacionaria de la reducción del salario y del presupuesto estatal, mostrando la ineficacia del gobierno para llevarla adelante y para construir consenso social en torno de ella.³⁸

La confluencia de diversos intereses sociales en el rechazo al ajuste –desde la burguesía industrial y agraria agrupada en el Grupo Productivo o las medianas empresas representadas por CAME, hasta las organizaciones de trabajadores estatales y privados de la CGT de Moyano o la CTA– había puesto en evidencia que la continuación de la vía del ajuste como única política de superación de la crisis tenía escasas posibilidades de realización.

Pero además, la inviabilidad del ajuste –que se percibía desde el inicio de la gestión de López Murphy–³⁹ impactaba en la tendencia a la *caída de las reservas* internacionales: ante la incapacidad de superar los problemas que llevaban a la necesidad de ampliación permanente del crédito, se impone la *salida “individual” de los capitalistas*, es decir, la protección de sus intereses económicos más inmediatos, en contradicción con las posiciones políticas que asumían, que sería determinante en los meses posteriores. De esta manera, el apoyo expresado públicamente a López Murphy por la burguesía financiera local y las empresas más importantes del país contrastaba con la caída de las reservas del Banco Central, que durante la gestión del ministro llegó a US\$ 3.055 millones, un 8,6% del total existente cuando su designación (datos del BCRA).

Modificaciones en la política económica y tensiones en el bloque en el poder:

En este contexto de resistencia social al ajuste y de salvación individual de los capitalistas, se produce un *cambio* en la política del Gobierno: se propuso atacar el problema de las dificultades de realización de las mercancías y el excedente contenido en ellas. Con Domingo Cavallo como nuevo ministro de Economía, tomó como objetivo *mejorar la competitividad*

³⁸ La crisis financiera que pretendía alejar el ajuste se acercó considerablemente, con los títulos de deuda y el valor de las acciones llegando a los niveles del 7 de noviembre, cuando lo posibilidad del *default* había vuelto necesario el Blindaje financiero, a partir de una advertencia sobre el riesgo de las inversiones financieras en Argentina realizada de la calificadoradora *Standard & Poor's* (*Clarín* 20/3/01 y datos de Mercado de Valores de Buenos Aires).

³⁹ Las escasas expectativas de éxito del ajuste pueden verse en la caracterización del *Financial Times* que, ante la designación de López Murphy, concluía que “los obstáculos políticos son considerables. Lo más probable es que el camino hacia la recuperación sea accidentado. Los inversores necesitarán ser pacientes” (publicado en *Clarín* 7/3/01).

internacional de la producción local sobre la base de *reducir los costos* de inversión y producción mediante la reducción de aranceles de importación de bienes de capital, la implementación de subsidios y rebajas de impuestos a la producción industrial y agraria, y de limitar la competencia en el mercado interno mediante la suba de los aranceles a la importación de productos finales. Los “Planes de Competitividad” fueron la herramienta con la que se proyectó lograr la reactivación económica, focalizando las mejoras de competitividad en los sectores más afectados por la recesión. El objetivo declarado por el nuevo ministro era reducir los costos de producción en un 20% en esos sectores, para lograr una rápida reactivación (*Clarín* 22/3/01). Cavallo ponía, entonces, en el centro de la escena, el problema de la capacidad de competir internacionalmente de la producción argentina y los efectos de la apertura comercial sobre la industria local⁴⁰.

Más adelante nos ocuparemos de la relación entre la política económica proyectada y la política económica efectivamente realizada. Por el momento, nos limitamos a constatar que el cambio en la política económica que proyectaba Cavallo implicaba el reconocimiento de una limitación que había tenido la política seguida hasta ese momento. Sucedió que la estrategia de superación de la crisis dentro de las condiciones de predominio del capital asentado en los servicios y la intermediación financiera necesitaba *conducir las disputas en el bloque en el poder incorporando demandas sectoriales de fracciones del capital subordinadas*. En este sentido, el plan inicial de Cavallo como ministro buscaba la reactivación a partir de volcar recursos hacia la esfera de la producción, lo que habilitaba el apoyo de las fracciones del capital agrupadas en el Grupo Productivo. De esta manera, a diferencia de la gestión anterior, Cavallo recibió el apoyo del presidente de la Unión Industrial Argentina, que señaló la sintonía de las medidas anunciadas con las demandas de la entidad, y del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que auguraba la puesta en marcha de los demorados planes de infraestructura. Pero, además, Cavallo recibió el apoyo del presidente del Consejo Empresario Argentino y de la Asociación de Bancos de la Argentina, que presionaban por la sanción legislativa de los poderes especiales que pedía el ministro (*Clarín* 21-23/3/01). Al igual que con el Blindaje a fines de 2000, el inicio de la gestión de Cavallo mostraba un momento de unidad de las diferentes fracciones de la burguesía, pero ahora sustentando una propuesta de incentivos a la producción industrial. Si la expectativa de los organismos financieros internacionales al otorgar el Blindaje estaba puesta en la posibilidad de acelerar la

⁴⁰ Según el diario *Clarín* (23/03/01), “el principal cambio que hizo el nuevo ministro es en el discurso económico de la Argentina. Después de muchos años (...) se volvió a hablar de crecimiento y producción como metas centrales (...) Su desafío es corregir todo el daño que la convertibilidad le causó —en la década del 90— a la producción argentina con la apertura indiscriminada y su decisión de no atacar el costo más caro que tienen los argentinos: la tasa de interés que cobran los bancos y las tarifas de los servicios públicos”.

productividad y reducir costos de producción para superar los problemas de competitividad internacional de la economía argentina sin modificar el tipo de cambio, el inicio de la gestión de Cavallo parecía ser el momento en que esa posibilidad comenzaría a efectivizarse.

Pero la efectivización de este cambio de política económica dependía de la obtención algo fundamental: recursos. Junto con la ley que le delegaba al Ejecutivo atribuciones parlamentarias para implementar los planes de competitividad, Cavallo lograba la aprobación de un nuevo impuesto a los movimientos de cuentas corrientes. En virtud de su reglamentación, Cavallo esperaba que el nuevo impuesto aportara unos 2.200 millones de pesos hasta fin del año 2001 (*Clarín* 23 y 24/3/01), con los de que debía, además, mantener la apariencia de solvencia frente a los pagos de deuda en el corto plazo. De esta manera, se registraba la *paradoja* de que el Gobierno intentaba *reactivar la producción* capitalista local utilizando recursos obtenidos *por una vía inmediatamente recesiva*. Como contrapartida de esta vía de financiamiento, Cavallo esperaba que Estados Unidos otorgara un crédito bilateral por US\$ 3.000 millones, que el ministro creía poder negociar directamente con el Tesoro de ese país, sin la mediación del FMI. La necesidad creciente de financiamiento de Argentina contrastaba con la situación global del capital financiero, caracterizada por el reflujo de capitales desde los llamados “países emergentes” y el aumento de las primas de riesgo y, por lo tanto, de las tasas de interés para estos países, tras las crisis de Turquía, Rusia y Brasil (Ministerio de Economía 2001).⁴¹ En este contexto, y a partir de una política de no propiciar salvatajes financieros a países en crisis que no tengan una importancia estratégica para EE.UU., el Tesoro de este país no ofreció crédito alguno a la Argentina, clausurando una de las vías de aprovisionamiento de recursos del Estado⁴² y comprometiendo así el programa de reactivación que el ministro tomaba como centro de su política.⁴³

Sin créditos adicionales, el gobierno enfrentaba los efectos del cuadro de recesión, deflación, caída de la recaudación impositiva y aumento del déficit fiscal por encima de lo acordado con el FMI para el primer trimestre de 2001. Esta situación implicaba la suspensión del desembolso de los créditos ya acordados, empujando los indicadores de riesgo hacia arriba de los niveles correspondientes a los “países emergentes”, mientras la Argentina necesitaba una

⁴¹ Sobre la importancia de estas crisis y su impacto en los llamados países emergentes, véase el artículo de Matías Eskenazi en este libro.

⁴² De hecho, las autoridades del Tesoro estadounidense eran aún más reticentes que el FMI a otorgar créditos a la Argentina. La falta de realismo del pedido argentino puede advertirse en las características del salvataje financiero de US\$ 10.000 millones efectivamente concedido por el FMI, con acuerdo del Tesoro estadounidense, en esos meses: tenía como destinatario a Turquía, país de importancia estratégica para los EE.UU., que anunciaba la puesta en marcha de un programa de privatizaciones de empresas estatales, dos requisitos que Argentina estaba lejos de cumplir (*Clarín* 15/4, 28/4, 29/4 y 28/7/01).

⁴³ Estos recursos eran necesarios para solventar la implementación de subsidios y la reducción o exención de impuestos a la producción.

financiación adicional a la acordada en el Blindaje para cubrir el rojo de las cuentas fiscales (*Clarín* 12/4/01).

La posibilidad de que la delicada situación fiscal y productiva de la Argentina no se agravara dependía de que el gobierno pudiera revivir el Blindaje financiero para asegurarse los créditos ya acordados, al mismo tiempo que tenía que hacer frente al déficit excedente respecto del acordado con el FMI. La necesidad de ampliación permanente del crédito junto al deterioro de la recaudación impositiva y del nivel de actividad económica, llevaban a que el riesgo país y las tasas de interés que debía pagar el Estado para endeudarse se ubicaran entre los mayores del mundo. En este contexto, las reservas de divisas caían en unos US\$ 5.000 millones, un 15% de total existente al momento de la asunción de Cavallo como ministro, y el Gobierno tenía que suspender las colocaciones de bonos para no convalidar tasas de *default* como las que habían hecho necesario el Blindaje a fines del 2000 (datos de BCRA).

La necesidad de recuperar el crédito externo llevó al ministro Cavallo a profundizar la política recesiva con una extensión y aumento de impuestos al consumo, un aumento del impuesto a los movimientos de cuentas corrientes y un recorte de gastos estatales. Con este *ajuste*, esperaba mejorar las cuentas fiscales en \$1.800 millones, y proyectaba una mejora fiscal de \$ 4.000 millones, junto con la alícuota original del impuesto a los movimientos de cuenta corriente. Sobre la base de esta profundización de la política recesiva efectivamente implementada –contraria a la declarada como objetivo– hasta el momento y después de 40 días de virtual cesación de pagos, Cavallo logró un acuerdo con el FMI que permitió desbloquear fondos previstos en el Blindaje por un total de US\$ 2.700 millones.

En definitiva, *la política económica del Estado mostraba una contradicción entre los proyectos de reactivación económica y las necesidades del mantenimiento del flujo de divisas hacia la economía argentina, que presionaban a la implementación de medidas recesivas.* Estas medidas tenían por objeto mejorar la situación fiscal, pero agravaban la caída de la actividad económica y, con ello, la capacidad estatal de absorber mayores recursos para reducir el déficit fiscal. El efecto de las medidas recesivas se veía agravado por la no efectivización de los planes de competitividad y de infraestructura firmados por el gobierno con la burguesía industrial y agraria.⁴⁴

Ineficacia estatal, recesión e ingeniería financiera:

⁴⁴ La apertura de estos planes no se produciría hasta julio y su implementación se haría efectiva recién a partir del mes de agosto (*Boletín Oficial* 20/6, 5/7, 6/7, 24/7, 27/7, 31/7 y 1/8/01, y *Clarín* 4/9/01).

La ineficacia de la política económica estatal y los problemas de financiamiento tenían un efecto negativo sobre economía. Durante los primeros meses de la gestión de Cavallo, la producción industrial siguió su marcha descendente: en marzo se redujo un 4,5%, en abril un 1,7% y en mayo un 2,8%, en relación a los mismos meses del año anterior. Como resultado de la caída de la actividad, la recaudación impositiva cayó un 12,9% en marzo y un 9,1% en abril, aunque se recuperó un 8% en mayo por el aumento de la recaudación del impuesto a las cuentas corrientes. En estos tres meses se generó, entonces, un déficit fiscal superior a los \$3.000 millones por la caída de la recaudación y el aumento de los intereses de la deuda (*Clarín* 4 y 18/4, 5 y 17/5, 12 y 16/6/2001). Con el estancamiento del mes de junio (0,2%), la producción industrial cayó un 5,8% en el segundo trimestre del año, en relación al segundo trimestre de 2000 (datos del INDEC). Así, la reactivación se disolvía en el aire, y se agrandaba el fantasma del *default* como final de la convertibilidad.

La continuidad de la recesión erosionaba el apoyo de la burguesía industrial y agraria, originado en las medidas de reactivación proyectadas⁴⁵. De esta manera, la burguesía industrial reclamaba complementar las medidas aduaneras con medidas para-arancelarias como la fijación de precios de referencia sobre los que se aplicaran los impuestos a las importaciones y la implementación de los planes de competitividad, al mismo tiempo que apoyaba la incorporación del euro a la convertibilidad y presionaba para replantear la relación comercial con Brasil ante la “disparidad cambiaria” (*Clarín* 1 y 16/4/01, 22/5/01); y la burguesía rural y agroindustrial demandaba la reducción de impuestos a esas actividades (*Clarín* 11 y 21/4/01).

Al mismo tiempo, el deterioro de la situación financiera de la Argentina revitalizaba el apoyo de la burguesía industrial al gobierno, ante la necesidad de evitar la cesación de pagos, lo que la unificaba con los sectores de capital asentados en la intermediación financiera. Así, la UIA apoyaba a Cavallo ante la presión de los bancos extranjeros, al igual que ABA criticaba la decisión de *Standard & Poors's* de reducir la calificación crediticia de la Argentina (*Clarín* 11/5/01). El aumento del déficit fiscal más allá de los límites financiados por el FMI con el Blindaje y las necesidades de ampliación del financiamiento que implicaba mantenían el riesgo país en niveles sensiblemente superiores a los correspondientes a los “países emergentes”. En estas condiciones, el FMI presionaba por un canje de bonos de deuda, de manera de postergar pagos de deuda sin un nuevo financiamiento adicional del organismo

⁴⁵ Vale recordar que de estas medidas sólo se hallaba vigente la modificación de los aranceles aduaneros.

(*Clarín* 28/5/01). El llamado “Megacanje” se efectuó en los primeros días de junio y significó un alivio inmediato para las arcas del Estado, a un costo financiero similar al que había hecho necesario el Blindaje a fines del 2000.⁴⁶

El Gobierno nacional confiaba en que el canje de deuda generaría mejores condiciones para la aplicación de las demoradas políticas de reactivación. El éxito del Megacanje consistía en la posibilidad de contribuir a la recuperación de la economía, lo que debía evidenciarse en una recuperación de los indicadores de producción, de las tasas de interés, de la inversión y, sobre esta base, debía mejorar las cuentas fiscales. Una vez finalizado, el canje permitió una baja de los indicadores de riesgo y de las tasas de interés que pagaba el Estado para endeudarse, que se acercaban a los niveles posteriores al Blindaje, lo que parecía confirmar las expectativas gubernamentales (*Clarín* 30, 31/05/01, 9 y 13/6/01).

Con la descompresión de los indicadores de riesgo y las tasas de interés, el Gobierno implementó otra demorada medida: la utilización de un tipo de cambio para el comercio exterior en función del promedio del dólar y el euro, llamado “factor de empalme”, que significaba una devaluación real del 7% (*Clarín* 16 y 17/6/01)⁴⁷. Esta medida estaba destinada a paliar los efectos de la apreciación del peso a partir de la devaluación de la moneda brasilera, que llegaba al 23% en los primeros cinco meses de 2001 (*Clarín* 2/6/01), pero su efecto más notorio fue detener la baja del riesgo país.

Una nueva caída de la recaudación impositiva en junio ponía en duda la capacidad de cumplir con las metas de déficit fiscal acordadas en el Blindaje para el segundo semestre de 2001 (*Clarín* 3/7/01). A esta situación se sumaba la devaluación de las monedas latinoamericanas respecto al dólar (y, por lo tanto, la apreciación del peso), las pérdidas en las bolsas mundiales y el incremento del riesgo de los llamados “países emergentes” (*Clarín* 12/7/01). En este contexto, los rumores de que Argentina no podría cumplir con los pagos de la deuda lanzados por un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo generaron una escalada del riesgo país, que llegó a superar los 1.600 puntos y una caída de los bonos de deuda argentinos, que alcanzó el 35%. En estas condiciones, el Gobierno se vio obligado, para evitar la cesación de pagos, a convalidar una tasa de interés similar a la que obligó al otorgamiento del Blindaje (*Clarín* 12 y 14/7/01).

⁴⁶ El canje alcanzó la cifra de U\$S 29.477 millones, a una tasa promedio de 15,25%. Aproximadamente, U\$S 22.000 millones correspondían a acreedores locales (*Clarín* 04/06/2001).

⁴⁷ Al mismo tiempo, evaluaba otras medidas como la reducción de la alícuota de ganancias para los asalariados y rebajas de impuestos para abaratar el precio de los autos (*Clarín* 2/7/01).

La Argentina se encontraba en una situación similar a la que desembocó en el Blindaje financiero a fines de 2000, con el crédito privado cortado (*Clarín* 9/7/01), pero ahora sin la posibilidad de un nuevo rescate financiero del FMI ni del Tesoro estadounidense. Desde la primera semana julio, las reservas de divisas del Banco Central comenzaron una baja que ascendería a U\$S 3.700 millones en dos semanas, un 13,6% de las reservas existentes al último día de junio (datos del BCRA). A siete meses de firmado el Blindaje, la economía argentina no había podido superar la recesión y las cuentas fiscales seguían necesitando del auxilio permanente del FMI, que ya no estaba disponible. En este escenario, Cavallo lanzó un paquete de medidas de las cuales la más importante era la “*Ley de Déficit Cero*”, que reducía los gastos del Estado al nivel que fuera necesario para cubrir los pagos de la deuda con los recursos de la recaudación impositiva. En su primer mes, significó una reducción del 13% de salarios estatales y jubilaciones superiores a \$500 (*Clarín* 30/7/01).

La ley de déficit cero volvió a mostrar a los diferentes sectores del empresariado apoyando al Gobierno, en una medida que veían como necesaria frente a la inminencia de la cesación de pagos, cuyas consecuencias eran mucho más perjudiciales para sus intereses (*Clarín* 31/7/01). Expresaron su apoyo al programa de ajuste el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, el Movimiento Industrial Argentino, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, y ejecutivos de empresas o grupos como Telecom, Socma, Ford, Soldati y Pérez Companc, entre otros.⁴⁸ La Ley de déficit cero era la última confesión de que la Argentina no podía superar sus problemas fiscales mediante una reactivación de la producción y tenía que hacerlo por vía del ajuste fiscal, sin importar ya los costos ni la conflictividad social que generase.⁴⁹ Pero aún cuando apoyaran el programa de déficit cero, los empresarios no creían que pudiera tener como resultado un impulso a la reactivación económica (*Clarín* 31/7/01). En efecto, el programa de ajuste reducía la demanda estatal y el consumo privado, generando mayores dificultades para la realización de las mercancías producidas en el país, lo que hacía previsible una caída del producto bruto.⁵⁰

Con el Blindaje financiero el gobierno había logrado un momento de unidad de las fracciones del capital, en torno a la tarea de garantizar el flujo positivo de divisas con la consecuencia previsible de la baja de la tasa de interés para la producción, y había abierto la posibilidad de

⁴⁸ La expresión institucional de la burguesía industrial (la UIA) no apoyó el déficit cero, aunque sí lo hicieron las otras corporaciones que conformaban el Grupo Productivo (la CAC y las CRA) e importantes empresarios integrantes de la UIA (*La Nación* 11-14/7/01).

⁴⁹ Sobre la conflictividad social en el período y la resistencia al déficit cero, véanse los artículos de A. Bonnet y A. Piva en este libro.

⁵⁰ El Instituto de Estudios Fiscales y Económicos estimaba que el programa de déficit cero implicaría una caída del 1,5% del PBI (*Clarín* 30/7/01).

satisfacer los intereses económico-corporativos de las fracciones subordinadas del capital (expresadas en las demandas de subsidios a la producción). Con el agotamiento del Blindaje (que genera la renuncia de Machinea y el ajuste fallido de López Murphy) el gobierno se vio obligado a modificar su estrategia hacia la reactivación económica. Esta nueva estrategia le permitió integrar a su política económica las demandas económico-corporativas de la burguesía industrial y agraria. Pero la ineficacia gubernamental para implementar las medidas que tendían a la reactivación, la desproporción de éstas respecto a las determinaciones de la crisis de acumulación y la imposibilidad de acceder a la ampliación del crédito necesaria a tasas que permitieran un programa de reactivación, llevaron a un importante alza de las tasas de interés. Esta situación impulsó al gobierno a encarar un programa recesivo de una magnitud tal que aseguraba la imposibilidad de toda reactivación. La reactivación era condición para asegurar el flujo de divisas hacia la Argentina, que a su vez era condición para el sostenimiento de la convertibilidad. La imposibilidad de la reactivación significaba también *la imposibilidad de sostenimiento de la convertibilidad*.

Derrumbe de la producción y fuga de reservas. La burguesía y la clase trabajadora como sepultureros de la convertibilidad:

La imposibilidad de sostenimiento de la convertibilidad va a tomar la forma de virtual *cesación de pagos, derrumbe de la producción y pulverización de las reservas* de divisas que la respaldaban. La producción industrial cayó todos los meses en los que estuvo en vigencia el déficit cero, con tasas de entre 4,5% en julio y 12% en septiembre, respecto a los mismos meses del año 2000; en el tercer trimestre, el producto bruto interno cayó un 4,9%, empujado tanto por la caída en la producción de bienes como de los servicios (datos de INDEC). La caída persistente de las reservas se inició en los primeros días de julio y continuó hasta la implementación del “corralito financiero” en diciembre. Durante el mes de julio, hasta la sanción del déficit cero, las reservas cayeron en U\$S 7.009 millones, un 25,3% respecto al último día hábil de junio. La sanción de la ley de déficit cero no provocó el fin de la sangría de las reservas de divisas. En agosto, las reservas cayeron en U\$S 2.790 millones, un 13,8% respecto al último día de julio (datos de BCRA). En septiembre las reservas volvieron a crecer, a partir de un crédito del FMI por U\$S 7.000 millones destinado a “desalentar las maniobras especulativas contra el peso” (*Clarín* 31/7/01). Pero en octubre las reservas volvieron a caer U\$S 3.609 millones (14,6%) y en noviembre U\$S 5.995 millones (28,3%).

De esta manera, hasta fin de noviembre la caída de reservas consumió un total de U\$S 19.071 millones, incluyendo los U\$S 7.000 millones aportados por el FMI, por lo que quedaron en un 55,7% del nivel del último día de junio (datos de BCRA).

En este contexto de debacle económica, la Alianza pierde las elecciones legislativas de 2001, en las que cobra especial relevancia el llamado “voto bronca”, evidenciando la pérdida de legitimidad que resultaba de sus políticas (Bonnet 2001). El período que se inicia con el déficit cero es sin duda el de mayor conflictividad al interior de la burguesía, en el que la alternativa de *devaluación* o *dolarización* de la economía alcanza expresión pública e importancia política. La confrontación entre salidas alternativas de la convertibilidad *requirió de la debacle objetiva y política de la propia convertibilidad*, esto es, del período comprendido entre el blindaje financiero de 2000 y el déficit cero de 2001. Aun en esta confrontación, las diferentes fracciones burguesas en conflicto coincidían en una “política”: la protección del valor de su capital, a costa de la capacidad de representar valor de la moneda local.

La suerte de la convertibilidad estaba echada. La burguesía y la clase trabajadora se encargaron de sepultarla. La burguesía, en la protección de sus intereses económicos más inmediatos, retirando los depósitos del sistema bancario y generando una sangría de las divisas. Su acción iba en contra del programa de déficit cero que apoyaba, y generó como respuesta defensiva del Gobierno el “*corralito*” bancario, que catalizó la resistencia contra la vía deflacionaria de supervivencia de la convertibilidad (Bonnet 2008, Piva 2007). La clase trabajadora, en la insurrección de diciembre, protagonizada fundamentalmente por fracciones suyas, que incluyó saqueos, cortes de rutas, huelgas, cacerolazos, apagones, combates callejeros con la policía, y culminó rebasando el estado de sitio firmado por el Gobierno⁵¹. La combinación de estas formas de acción significó la sentencia de muerte de la convertibilidad y, con ella, la del gobierno de la Alianza, cuya razón de ser había sido, precisamente, su sostenimiento.

⁵¹ Una descripción y conceptualización detallada de los sucesos de diciembre de 2001 pueden encontrarse en Auyero 2002, Bonnet 2008, Iñigo Carrera y Cotarelo 2004, Piva 2007. Tomando estas fuentes, y como sucinto resumen, puntualizamos que las protestas se dieron en principio como respuesta al “*corralito*” bancario (que atrapó ahorros y salarios), y finalmente frente al estado de sitio instaurado para contenerlas, hasta derribar al gobierno. Entre quienes fueron parte de la misma, la CAME convoca a un apagón y cacerolazo, las tres centrales sindicales, las dos CGT y la CTA, llamaron a una huelga general el 13 de diciembre, para reclamar la liberación de los salarios acorralados y la renuncia de Cavallo. Entre el 14 y el 18 se produjeron cortes de ruta y saqueos a supermercados en diversos puntos del país, protagonizados por las fracciones más pobres de la clase trabajadora, con enfrentamientos con las fuerzas policiales. El día 19 se multiplican los cortes de ruta, los enfrenamientos con la policía, y los saqueos a supermercados; a la noche el presidente De la Rúa instala el Estado de Sitio y lo difunde por cadena nacional de radio y televisión. La respuesta al estado de sitio es el comienzo de los cacerolazos en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y la masiva concentración nocturna en la Plaza de Mayo, que precipita la renuncia del ministro Cavallo. El 20 de diciembre, se produce el combate en el centro de Buenos Aires y la represión policial, hasta la renuncia del presidente De la Rúa.

Bibliografía

- Acuña, C. (1994): "El Análisis de la Burguesía como Actor Político" en *Realidad económica* 128, Bs. As., IADE.
- Aronskid, R. (2001): *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los noventa*, Bs. As., Libros del Rojas.
- Astarita, R. (2001): "Crisis y estrategia de acumulación", en Suplemento de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo en *Página 12*, abril 2001.
- Astarita, R. (2004): *Valor, mercado mundial y globalización*, Bs. As., Ediciones Cooperativas.
- Auyero, J. (2002): *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en Argentina democrática*. Buenos Aires, Libros del Rojas - Universidad de Buenos Aires
- Basualdo, E. (2001): *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Bernal, UNQ.
- Basualdo, E. (2006): *Estudios de historia económica argentina. Deuda externa y sectores dominantes desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Bs. As., FLACSO / Siglo XXI.
- Bonefeld, Werner: "El capital como sujeto y la existencia del trabajo", en *Marxismo Abierto Vol. II*, Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2007.
- Bonnet, A. (2008): *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*, Bs. As., Prometeo.
- Bonnet, Alberto: "Elecciones 2001: nadie vota a nadie". En *Cuadernos del Sur* 32, Bs.As, 2001.
- Braun, O. (1975): "Desarrollo del capital monopolista en la Argentina", en O. Braun (comp.): *El capitalismo argentino en crisis*, Bs. As., Siglo XXI.
- Diamand, Marcelo: "Doctrinas económicas, desarrollo e independencia", Paidós, Buenos Aires, 1973.
- Gaggero, A. y Wainer, A. (2004): "Crisis de la convertibilidad: el rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio", en *Realidad económica*, 204, Bs. As., IADE.

Gerchunoff, P. y Torre, J. C. (1996): “La política de liberalización económica en la administración de Menem”, en *Desarrollo económico*, 143, Bs. As., IDES.

Gramsci, A. (1997): *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno*, Bs. As., Nueva Visión.

Holloway, J. (1994): *Marxismo, estado y capital*, Bs. As., Tierra del Fuego.

Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2004): “La insurrección espontánea: Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización”, *Documento de Trabajo de PIMSA* 43, Bs. As., PIMSA.

Iñigo Carrera, J. (2007): *La formación económica de la sociedad argentina. Vol. I*, Bs. As., Imago Mundi.

Iñigo Carrera, J. (2002): “Estancamiento, crisis y deuda externa. Evidencias de la especificidad del capitalismo argentino”, *Documento del CICP*, Bs. As.

Lattuada, M. (2006): *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina*, Bernal, UNQ.

Marx, K. (1998): *El Capital*, México, Siglo XXI.

Marx, K. (1999): *Introducción general a la crítica de la economía política*, México, Siglo XXI.

Marx, Karl, y Engels, Frederic: "La ideología alemana", Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo 1973.

Miliband, R. (1985): *El Estado en la sociedad capitalista*, México, Siglo XXI.

Ministerio de Economía (2001): *La política argentina en perspectiva: diagnóstico, respuestas y desafíos*, Bs. As., MECON.

O' Donnell, G. (1977): “Estado y alianzas en la política argentina”, en *Desarrollo económico* 64, Bs. As., IDES.

Peralta Ramos, M. (2007): *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*, Bs. As., Fondo de Cultura Económica.

Piva, A. (2007): “Acumulación de capital y hegemonía débil en la Argentina (1989-2001)”, en *Realidad económica* 225, Bs. As., IADE.

Piva, A (2005): “Acumulación de capital, desempleo y sobreocupación en Argentina (1989 – 2003) en Cuadernos del Sur, N° 38, Buenos Aires.

Podestá, J y Tarditi, R (1997): “Apuntes teórico metodológicos para el estudio de la crisis: el aporte de Antonio Gramsci”, *PIMSA*, Documento de Trabajo 10, Buenos Aires, 1997.

Portantiero, J: “Economía y política en la crisis argentina”, en *Revista Mexicana de Sociología*, N° 2, México 1977.

Poulantzas, N (1986): *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*, México: Siglo XXI Ediciones

Poulantzas, N. (1979): *Estado, poder y socialismo*, Madrid, Siglo XXI.

Salama, P. (2004): “Argentina: del desastre social a la recuperación económica”, en *Ciclos*, XIV (28), Bs. As., IIHES-FCE-UBA.

Salvia, S. y Frydman, A. (2004): “Modo de acumulación y relaciones de fuerza entre capital y trabajo en Argentina en los ’90”, en *Herramienta* 26, Bs. As.

Salvia, S. (2007): “Clases sociales y política económica del Estado. Argentina en la crisis de 2001”, ponencia en *XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)*, Guadalajara, México, 13-18/8/07.

Schorr, M. (2001): *¿Atrapados sin salida? La crisis de la convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico*, Bs. As., FLACSO.

Unión Industrial Argentina (2001a): *Bases para refundar la Nación*, Bs. As.

Unión Industrial Argentina (2001b): “La visión de la Unión Industrial Argentina sobre la depresión económica. Propuestas para superarla”, en *Memorias de la VIIª Conferencia Industrial Argentina. Encuentro de los Argentinos: un Proyecto Nacional para el desarrollo. El verdadero riesgo es no tener país*, Bs. As.

Fuentes

INDEC

BCRA

Ministerio de Economía.

Boletín Oficial

Diario *Clarín*

Diario *La Nación*